

**PROTOCOLO DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
EN EL ÁMBITO DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL**

Disposiciones generales

ARTÍCULO 1. Principio general. El alojamiento de las personas privadas de libertad será dispuesto, en la medida de lo posible, en establecimientos cercanos a su familia, a su comunidad, a quienes ejercen su defensa técnica y a la autoridad judicial competente, procurando garantizar el derecho de la persona privada de libertad al máximo contacto posible con el mundo exterior.

ARTÍCULO 2. Competencia y control judicial. La distribución y asignación de los lugares de detención es de competencia de la Dirección General de Régimen Correccional de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7, punto III de la ley 24.660. Tal facultad se ejercerá en forma motivada, a través de las distintas Direcciones descritas en este protocolo, pero deberá ser siempre puesta en conocimiento de la autoridad judicial para el correspondiente control jurisdiccional.

ARTÍCULO 3. Principios rectores. Toda medida de traslado que deba disponerse deberá ser justificada debidamente y se adoptará teniendo en especial consideración, entre otros factores:

- a) Que la ejecución de la pena debe tener como objetivo principal la reinserción social de la persona privada de libertad;
- b) Que el contacto con la familia y el mundo exterior es fundamental en el proceso de reinserción social e incluye el derecho a recibir visitas de familiares y representantes legales;
- c) Que las restricciones a las visitas pueden tener efectos en la integridad personal de las personas privadas de libertad y de sus familias.

ARTÍCULO 4. Elementos generales a considerar previo a todo traslado. Los establecimientos penitenciarios al momento de evaluar el traslado de una persona privada de libertad a otro establecimiento deberán considerar los siguientes aspectos:

- a) Que no exista causa pendiente de resolución judicial. En caso de existir, se deberá contar con la conformidad del juzgado correspondiente;
- b) En los casos de personas privadas de libertad de nacionalidad extranjera, se deberá cotejar que no cuenten con disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, por medio de la cual se declare irregular su permanencia en el territorio nacional y orden de expulsión a efectivizarse dentro de los seis (6) meses;
- c) No se trasladará a personas condenadas que fueron evaluadas por los miembros del Consejo Correccional, y respecto de las cuales se haya propiciado de forma favorable el usufructo de salidas

transitorias, cuando su alojamiento actual sea el más próximo al domicilio fijado para dichas salidas;

- d) No se trasladará a personas condenadas que se encuentren a menos de (90) noventa días del cumplimiento del requisito temporal para acceder a la libertad condicional y/o asistida;
- e) En los casos de personas que se encuentren alojadas en el marco de las disposiciones del “Protocolo de resguardo para personas en situación de especial vulnerabilidad”, se deberá corroborar previamente que la unidad de destino garantice la aplicación del citado protocolo;
- f) Las personas que se encuentren bajo tratamiento infectológico y/o tratamiento psiquiátrico, pacientes con discapacidad, enfermedades oncológicas, intervenciones quirúrgicas y/o estudios de alta complejidad pendientes, deberán ser valoradas especialmente a los fines de evaluar el impacto del traslado y garantizar la continuidad del tratamiento en su nuevo destino;
- g) No se trasladará a personas que se encuentren con trámites iniciados y pendientes de resolución judicial para acceder al beneficio de prisión domiciliaria, hasta tanto se obtenga pronunciamiento firme, en consulta con la autoridad judicial a cargo;
- h) No se trasladará a personas que se encuentren cursando estudios universitarios, cuando no pueda garantizarse la continuidad de los estudios en el establecimiento de destino;
- i) Las personas cuyo género sea distinto al asignado al momento de su nacimiento que se encuentren alojadas en establecimientos penitenciarios o secciones diferenciadas de acuerdo con el género autopercebido, sólo podrán ser trasladadas a otros establecimientos que cuenten con condiciones de alojamiento equivalentes.
- j) No se trasladará a personas privadas de libertad embarazadas o aquellas a las que se haya autorizado a permanecer junto a sus hijas o hijos en el establecimiento penitenciario. Si mediare petición de la persona privada de libertad, o razones de salud o de otra índole hagan necesario su traslado temporario, se adoptarán medidas y protocolos específicos que atiendan a su situación particular y la de las niñas y niños involucrados.
- k) Se evaluará que no exista cualquier otro impedimento legal y/o reglamentario u orden judicial específica.

ARTÍCULO 5. Información sobre traslados. La División o Sección de Asistencia Social de cada establecimiento deberá contar con un registro actualizado de los nombres y contactos de las personas allegadas o familiares a las que la persona privada de libertad designe para que les sean informadas las decisiones sobre su traslado.

ARTÍCULO 6. Traslados solicitados por las personas privadas de libertad. Cuando exista interés de una persona privada de libertad de ser trasladada a otro establecimiento, la solicitud tramitará ante el Consejo Correccional de cada Unidad o Complejo, conforme la competencia asignada en el artículo 94, inciso 8 del Decreto 396/99.

El Consejo Correccional analizará la pretensión y sus motivos y se pronunciará en forma fundada sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de traslado.

En caso de considerar favorablemente la petición, elevará el caso a la Dirección de Judicial, dependiente de la Dirección General de Régimen Correccional, que dará intervención a las áreas técnicas de asistencia social y de criminología, dependientes de la Dirección Principal de Trato y Tratamiento.

El Director General de Régimen Correccional, de acuerdo con el dictamen de las áreas técnicas, resolverá la petición.

En caso de rechazarse la solicitud, se notificará de ello a la persona privada de libertad a través de su unidad de alojamiento y se le hará saber a la persona privada de libertad que tiene derecho a promover el control judicial de la decisión mediante los procedimientos establecidos en la ley procesal.

Traslados dispuestos por razones de cupo o capacidad de los establecimientos

ARTÍCULO 7. Procedimiento. Cuando razones vinculadas con la capacidad de los establecimientos o la distribución de las personas privadas de libertad, tornen necesario adoptar medidas de traslado de personas hacia un establecimiento alejado de su lugar de residencia habitual, se seguirán las pautas y procedimientos descritos en este capítulo.

ARTÍCULO 8. Acta fundada que justifica el traslado. La Dirección de Coordinación Administrativa, Legal y de Tratamiento de cada establecimiento emitirá un acta con la nómina de personas privadas de libertad que deban ser trasladadas por razones de cupo o exceso en la capacidad de los establecimientos. En dicha actuación deberán enunciarse de manera fundada las razones que justifican la medida de traslado dispuesta.

ARTÍCULO 9. Dictamen del área de trabajo social. Con esa nómina se dará intervención a la División de Asistencia Social del establecimiento que deberá informar acerca de las circunstancias particulares y familiares de cada persona y volcar la siguiente información:

- a) Lugar de residencia del grupo familiar primario;
- b) Si recibe visitas en el establecimiento y con qué regularidad, especialmente si cuenta con hijas o hijos menores que la visiten;
- c) Si se encuentra en trámite alguna salida por aplicación del artículo 166 de la ley 24.660, visita de penal a penal o visita extraordinaria;
- d) Un análisis del impacto que el traslado tendría en el caso concreto respecto del contacto con su entorno y la trascendencia de la medida a terceras personas;
- e) Toda otra información relevante desde lo social.

ARTÍCULO 10. Elevación a la Dirección de Judicial. El acta final con la decisión de traslado será rubricada por quien esté a cargo de la Dirección de

Tratamiento de la unidad o complejo y se elevará a la Dirección de Judicial, dependiente de la Dirección General de Régimen Correccional, que procederá al cotejo de la situación particular, las características personales, criminológicas, y de tratamiento penitenciario que exija el caso y evaluará el establecimiento de destino.

ARTÍCULO 11. Derecho de defensa y oposición al traslado. La Dirección de Judicial deberá notificar a la defensa técnica de la persona privada de libertad la decisión administrativa adoptada, como mínimo, 72 horas antes de la fecha prevista para el traslado, a los efectos de que tome conocimiento y, eventualmente, pueda oponerse mediante los procedimientos establecidos en la ley procesal, si así lo cree oportuno y conveniente.

ARTÍCULO 12. Control judicial. De la misma manera, y en el mismo plazo de 72 horas, la Dirección de Judicial pondrá en conocimiento de la autoridad judicial a cargo de la persona cuyo traslado se dispuso, junto con las razones que justifican la medida a efectos de permitir el control jurisdiccional de dicho acto.

ARTÍCULO 13. Traslado. Si la autoridad judicial no dispusiese formalmente la suspensión del traslado, se procederá a la materialización del traslado en la fecha prevista.

ARTÍCULO 14. Registro. La Dirección de Judicial, dependiente de la Dirección General de Régimen Correccional, registrará toda medida judicial que suspenda temporal o definitivamente un traslado dispuesto desde un establecimiento ubicado en el ámbito metropolitano de la Ciudad de Buenos Aires. Dichas órdenes judiciales se asentarán en un registro único a los efectos de la determinación e información de la capacidad y plazas existentes de cada establecimiento.

ARTÍCULO 15. Aviso. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 73 de la ley 24.660, a través de la División Asistencia Social de cada establecimiento, se informará de inmediato a las personas designadas por la persona privada de libertad sobre el establecimiento de destino previsto para el traslado.

ARTÍCULO 16. Medidas de reinserción social en casos de traslados. Las personas privadas de libertad trasladadas a establecimientos alejados tendrán derecho a comunicarse sin intermediarios, con su familia, con personas con las que mantengan vínculos afectivos o sociales, con sus representantes legales, representantes del ministerio público fiscal, autoridades judiciales, organismos de protección de los derechos humanos, representantes consulares y otras entidades públicas o privadas.

En todos los casos se respetará la privacidad de esas comunicaciones, sin otras restricciones que las dispuestas por la autoridad judicial competente.

Se procurará la utilización de sistemas de videoconferencia o de videollamada, o a través de software y/o aplicaciones que permitan comunicaciones de texto, voz y video, conforme las reglamentaciones y con ajuste a las condiciones, oportunidad y recaudos de seguridad de cada establecimiento.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo Disposición

Número:

Referencia: EX-2021-07568831- -APN-DGDYD#MJ

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.